



Quién se Preocupa por el Futuro:

¡Financia los Servicios Públicos con Perspectiva de Género!

Autor: Soren Ambrose y David Archer

Publicado por: ActionAid

Fecha: 13 de abril de 2020

Título original en inglés: [Who Cares for the Future: finance gender responsive public services!](#)

¿Por qué son importantes los trabajos de cuidado no remunerados?

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo de cuidados no remunerado como "el trabajo no remunerado realizado para mantener el bienestar, la salud y el mantenimiento de otras personas en un hogar o en la comunidad". Las mujeres y las niñas se enfrentan a múltiples cargas de cuidados y trabajo doméstico no remunerados, que se les transmiten tanto por los roles de género patriarcales como por el fracaso de los Estados modernos a la hora de prestar servicios públicos con perspectiva de género.

En la práctica del desarrollo, existe un abismo creciente entre el compromiso retórico con la igualdad de género y la realidad de un sistema económico neoliberal que depende de la desproporcionada carga de trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres. Las economistas feministas sostienen que el cuidado, y no el capital, debe ser el centro de nuestras preocupaciones. El cuidado de las personas y del planeta es clave para la sostenibilidad de la vida, para lo que la mayoría de la gente realmente valora. Así, urge repensar los sistemas económicos para integrar plenamente el concepto, el significado y la importancia del trabajo de cuidados -y reconocer los límites planetarios-, remodelando los marcos sociales y de políticas públicas.

El informe [Who Cares for the Future: finance gender responsive public services!](#), de ActionAid, explora las conexiones entre los servicios públicos con perspectiva de género y el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Ofrece recomendaciones prácticas para lograr un cambio radical en la financiación de los servicios públicos a través de acciones sobre la deuda, la austeridad y los impuestos. Y defiende que servicios públicos plenamente financiados y con perspectiva de género son la clave para redistribuir los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, así como para generar oportunidades de trabajo decente para las mujeres.

Cómo los servicios públicos con perspectiva de género reducen el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado

- **Educación y cuidados de temprana edad**

En la mayoría de las encuestas sobre los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, el cuidado de las y los niños aparece como una de las responsabilidades que más tiempo consumen, especialmente para las mujeres jóvenes. La división del trabajo en función del género obliga a muchas mujeres a no incorporarse nunca al

trabajo remunerado, a dejar el trabajo remunerado para cuidar de las y los hijos, o a elegir un trabajo que les permita acomodar las responsabilidades de cuidado. Esto lleva a menudo a las mujeres a un trabajo mal pagado, poco cualificado y no sindicalizado, muy lejos de la definición de trabajo decente de la OIT.

La provisión pública de servicios de cuidado y educación infantil puede ser transformadora para la vida de las mujeres, permitiéndoles buscar un empleo mejor remunerado, su propia educación o sus propios intereses. Garantizar la permanencia de las niñas en la escuela primaria ha sido una prioridad durante muchos años y, aunque siguen existiendo grandes retos en cuanto a la universalización de la matriculación y la calidad, el enfoque de las políticas se está desplazando en muchos países hacia la educación secundaria, rompiendo el ciclo intergeneracional de las cargas de cuidado, por ejemplo, reduciendo los embarazos y el matrimonio infantil. En los casos en que las escuelas han cerrado durante períodos prolongados, por ejemplo, debido al coronavirus, la carga de los cuidados que recae sobre las mujeres aumenta drásticamente.

- **Derechos y salud sexual y reproductiva**

El cuidado de las y los familiares enfermos y de las y los ancianos está ampliamente señalado como una parte importante de los cuidados no remunerados y del trabajo doméstico a cargo de las mujeres. The Lancet calcula que la contribución de las mujeres a la asistencia sanitaria equivale a casi el 5% del PIB mundial - o 3 billones de dólares a la salud mundial - pero casi la mitad no se paga ni se reconoce.

La carga asistencial global que soportan las mujeres se reduce significativamente cuando existe un sistema sanitario público sólido con más médicos y enfermeras, instalaciones adecuadas de buena calidad, buenos servicios de salud sexual y reproductiva, programas de inmunización eficaces, medicamentos asequibles, centros de salud locales más accesibles y más camas de hospital.

Los puestos de trabajo en el sector de la salud también son cruciales para ofrecer a las mujeres un trabajo remunerado -ya que dos tercios de los puestos de trabajo en el sector de la salud en todo el mundo están ocupados por mujeres-, aunque con demasiada frecuencia ellas se concentran en funciones de primera línea, mal pagadas y con malas condiciones.

- **Agua y Sanidad**

Para decenas de millones de mujeres y niñas, la recogida de agua es un ritual diario que requiere mucho tiempo y es agotador. Recoger el agua es un trabajo que recae en las mujeres en ocho de cada diez hogares que carecen de suministro por tuberías en todo el mundo.

En las zonas rurales, el agua debe recogerse tanto para el uso doméstico como para las labores agrícolas, y puede llevar horas cada día, con múltiples viajes para transportar cantidades de agua que agotan la espalda. En las zonas urbanas, por otro lado, los retos son diferentes, a menudo con largas colas en las bombas manuales comunales o en los camiones de reparto de agua, y con precios crecientes. El drenaje y el alcantarillado inadecuados en las ciudades también suelen ser una causa importante de mala salud, que agrava las funciones de cuidado de las mujeres de otras maneras.

Hacia un marco común de servicios públicos con perspectiva de género

La energía, la agricultura y el transporte público también merecen atención, así como las inversiones en protección social. De hecho, de acuerdo a la publicación hay tendencias e hilos conductores significativos en todos los servicios públicos:

- Cuando los servicios públicos son inadecuados o no tienen en cuenta las cuestiones de género, se aumenta el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres.

- Se han establecido objetivos ambiciosos, como los ODS, para universalizar el acceso a los distintos servicios públicos, de forma equitativa, pero los Estados están lejos de alcanzarlos debido a la falta crónica de financiación.

- Existe una creciente ola de privatización que amenaza con agravar el limitado acceso de las mujeres a los servicios públicos (cuando se modifican las tarifas, las mujeres y las niñas suelen ser las primeras en ser excluidas).

- A menudo se contraponen diferentes servicios públicos, como si la única manera de conseguir más dinero para un servicio fuera quitárselo a otro.

Impacto de nuevas deudas y crisis en la inversión pública

Los gobiernos suelen endeudarse si quieren proveer al desarrollo, y los países en desarrollo, en particular, a menudo se endeudan para invertir en la mejora de los servicios públicos. Pero la deuda puede tener efectos perjudiciales. De hecho, "crisis de la deuda" es una expresión familiar en los países en desarrollo. Desde finales de los años 70, la carga de la deuda sumió a países de toda América Latina, Asia y África en décadas de recesión financiera y regresión social. A finales de los años 90, los países pagaban tanto -alrededor del 16% de sus ingresos en 1998- por los servicios de la deuda externa, que la deuda se identificó como un cuello de botella principal para encontrar fondos adecuados para los servicios públicos; y las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que obligaron los países a aceptar programas de austeridad, agravaron esa preocupación.

Impacto del FMI en la inversión pública

El FMI ha sido durante mucho tiempo una de las fuerzas más poderosas a la hora de determinar la forma de las políticas económicas que siguen los países en desarrollo (y muchos países emergentes y desarrollados). Estas políticas influyen profundamente en los recursos disponibles para invertir en servicios públicos con perspectiva de género. El incumplimiento de las condiciones del FMI podía, y aún puede, dar lugar a la suspensión o cancelación de los préstamos y a un perjuicio para la reputación del país ante los inversores y otros acreedores. Además, esa institución singularmente poderosa, el FMI, tiene el mandato del sistema financiero internacional de establecer directrices para la política económica de los países en desarrollo, trabajando desde el imperativo de mantener ciertos indicadores en una banda convencional que juzga "sólida" para los sistemas capitalistas neoliberales, en lugar de construir economías que cuiden tanto de las personas como del planeta.

Posible impacto de reformas fiscales progresivas

Como alternativas concretas para el desarrollo de otras economías basadas en la perspectiva de derechos humanos, los impuestos sobre la propiedad, el patrimonio y la renta de tipo superior (tanto personal como de sociedades) pueden tener un potencial importante en los países en desarrollo. De hecho, dado el rápido

crecimiento del número de personas extremadamente ricas en los países en desarrollo, la imposición de la riqueza se convierte en un elemento central de un sistema fiscal progresivo. Sin embargo, los impuestos sobre el patrimonio en los países en desarrollo tienden a ser significativamente infrautilizados.

Dado que una gran proporción de los ingresos del impuesto sobre la renta de las personas físicas procede del 10% más rico (entre el 30 y el 50% en las economías avanzadas), el cumplimiento entre este grupo es absolutamente crucial para garantizar la sostenibilidad de los ingresos procedentes de este impuesto. Las principales prioridades deberían ser la revisión de los regímenes de incentivos fiscales y del impuesto de sociedades, la consideración de los impuestos sobre la propiedad y el patrimonio, el fortalecimiento de los sistemas fiscales y el fomento de la cooperación internacional en materia de impuesto de sociedades y otras reformas más amplias.

Conclusiones y recomendaciones

La última parte del documento presenta una serie de recomendaciones para mejorar la calidad de los servicios públicos, con perspectiva de género: - Aplicar políticas macroeconómicas expansivas e inversiones anticíclicas en servicios públicos que tengan en cuenta las cuestiones de género, resistiendo al culto a la austeridad del FMI y a las restricciones más amplias de la financiación pública.

- Invertir más en personal del sector público no militar y resistirse a la "contención" de la factura salarial del sector público que propugna el FMI. Los gobiernos deben reconocer que el personal del sector público (muchos de los cuales son mujeres) es una inversión esencial y sus condiciones laborales deben protegerse y mejorarse tanto como la inversión de capital en un momento de recesión.

- Establecer objetivos ambiciosos para aumentar la relación entre impuestos y PIB de forma progresiva, con el objetivo de aumentar un 5% en los próximos años y un 10% en 2030. Es necesario centrarse más en la recaudación progresiva de ingresos y con perspectiva de género, incluyendo el fin de los incentivos perjudiciales, la promoción y la aplicación de un impuesto de sociedades justo, así como de los impuestos sobre la renta, el capital, la tierra y la propiedad de los ricos.

- Suspender los pagos de la deuda para financiar las respuestas nacionales a la COVID-19 y renegociar el servicio de la deuda para el futuro, de modo que ella no supere el 12% de los presupuestos nacionales. Deben impulsarse mecanismos independientes de resolución de la deuda y garantizar que todos los nuevos préstamos se negocien con total transparencia ante el parlamento nacional, los medios de comunicación y los ciudadanos.

- Incluir el progreso de los derechos humanos y los ODS, incluidos los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, en las mediciones y objetivos económicos nacionales. Es hora de explorar ideas económicas alternativas y romper la dependencia de la visión limitada del mundo del FMI. COVID-19 es una oportunidad para un replanteamiento global, con una profunda revalorización de las inversiones en salud pública, educación y atención a los más vulnerables de nuestras sociedades.

- Centrarse en reconstruir el contrato social nacional en torno a los servicios públicos, resistiendo el empuje ideológico de la privatización. Los gobiernos deben reclamar la soberanía democrática sobre las decisiones sociales y económicas críticas y poner a sus ciudadanos en primer lugar.

- Realizar inversiones estratégicas y sostenidas en servicios públicos sensibles al género. Las y los ciudadanos tienen que unirse para exigirlos, vinculando a los activistas por los derechos de las mujeres, a los activistas por la

educación, la sanidad y el agua, a los sindicatos de los servicios públicos, a los movimientos por la justicia fiscal, etc.